



URVIO, Revista Latinoamericana de

Estudios de Seguridad

ISSN: 1390-3691

revistaurvio@flacso.edu.ec

Facultad Latinoamericana de Ciencias

Sociales

Ecuador

Montoya Prada, Alexander

Asalariados de la muerte: sicariato y criminalidad en Colombia

URVIO, Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad, núm. 8, septiembre, 2009,

pp. 61-74

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

Quito, Ecuador

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=552656557005>

- ▶ Cómo citar el artículo
- ▶ Número completo
- ▶ Más información del artículo
- ▶ Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

Asalariados de la muerte

Sicariato y criminalidad en Colombia

*Wage earners of the death
Sicariato and criminality in Colombia*

■ Alexander Montoya Prada¹

Fecha de recepción: junio 2009

Fecha de aceptación y versión final: septiembre 2009

Resumen

El sicariato es un recurso utilizado en el desarrollo de conflictos sociales desde el ámbito público estatal hasta el privado íntimo. En este artículo hacemos un recorrido de los últimos 30 años en la historia de Colombia, para estudiar la manera como se relaciona con diferentes actores y procesos, como los del narcotráfico y el paramilitarismo, describiendo la trayectoria de los sicarios, *modus operandi*, niveles de organización, móviles de los contratantes y tarifas. De igual manera abordamos la relación y la reacción del Estado ante el sicariato, con políticas de justicia, seguridad y rehabilitación.

Palabras clave: sicarios, conflicto, conflicto armado, cultura, violencia, narcotráfico, paramilitarismo, oficinas de cobro, justicia, políticas de seguridad.

Abstract

The *sicariato* is a resource used in the development of social conflicts from the public state area up to the private intimate. In this article we do a tour of last 30 years in the history of Colombia, to study the way as it relates to different actors and processes as those of the drug trafficking and the paramilitarism, describing the path of the assassins, *modus operandi*, levels of organization, mobiles of the contractors and tariffs. In the same way we approach the relation and the reaction of the State in front of the *sicariato* with policies of justice, safety and rehabilitation.

Key words: assassins, conflict, armed conflict, culture, violence, drug trafficking, paramilitarism, offices of collection, justice, safety policies.

¹ Profesor de la Universidad del Cauca (Colombia). Sociólogo, especialista en Comunicación y Estudios Culturales (Universidad del Valle), maestro en Historia y candidato a PhD en Historia (El Colegio de México). Investigador en estudios sobre conflicto y criminalidad: Universidad del Cauca, Universidad del Valle, Universidad del Norte, Colciencias, DANE, Alcaldía de Cali, Ministerio de Justicia, Consejo Superior de la Judicatura y Fiscalía General de la Nación. Correo virtual de contacto: alexmp@unicauca.edu.co

studiar los procesos de cambio en las dinámicas del conflicto en Colombia permite analizar sus relaciones, actores y acciones. Esto implica definir las características de fenómenos como el del sicariato, estableciendo las diferencias que tiene de otras formas, en el desarrollo del conflicto que deriva en acciones violentas. Asimismo, es necesario ampliar la imagen de la sicaresca literaria o cinematográfica, que si bien puede coincidir con ciertos rasgos de esta actividad en algunos momentos y lugares, tiende a convertirse en un lugar común que limita el análisis de un tema complejo, diverso en la relación entre contratantes, contratistas y víctimas, con variaciones en sus procesos regionales, organización y *modus operandi*².

Los textos analíticos que abordan específicamente el tema del sicariato son escasos, y los que se encuentran, en su mayoría son de principios de la década de 1990, que enfatizan el caso de Medellín, en una vertiente etnográfica. En general el tema se diluye en los trabajos dedicados al conflicto armado, la delincuencia organizada y el narcotráfico. En cuanto a las fuentes de información, nos basamos en informes institucionales, agregados de mortalidad y prensa³.

El Cartel de Medellín y los inicios

En Colombia el uso de la palabra *sicario* se generalizó con el asesinato del ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla, en 1984. No obstante, el sicariato operaba en la década de 1970 para narcotraficantes, esmeralderos y terratenientes, incluyendo algunos “pájaros”, matones a sueldo que actuaron durante la Violencia, el período de conflicto bipartidista de mediados del siglo XX. A Griselda Blanco, la “Reina de la Coca”, se le atribuye el inicio en el país de la modalidad de sicarios motorizados, pero es el Cartel de Medellín quien los consolida, con el entrenamiento brindado en algunas escuelas ubicadas en la ciudad y sus cercanías. Con la instrucción del israelí Isaac Guttnan Esternberge se especializaron en hurto, conducción y acondicionamiento de automóviles y motocicletas, manejo de armas, tiro al blanco, maniobras de seguimiento y vigilancia (Castillo, 1987: 193).

Las primeras bandas asociadas con el Cartel de Medellín fueron “Los Guantes Blancos”, “Los Magníficos”, “Los Quesitos” y “Los Priscos”. La banda de “Los Priscos” era la guardia pretoriana de Pablo Escobar, y la dirigían cinco hermanos; operaban desde el barrio Aranjuez de Medellín, un sector donde los únicos que patrullaban eran los militares de la IV Brigada. A finales de la década de 1980, en plena época de la guerra de Pablo Escobar contra el Estado, David Ricardo Prisco Lopera reclutó a más de 300 hombres para realizar secuestros, atentados terroristas y asesinatos. Asimismo, entre los sicarios más reconocidos se encuentra John Jairo Arias Tascón “Pinina”, un niño pobre de los barrios marginales de Medellín, ladrón a los 12, pandillero a los 14 y sicario a los 15. Entrenado en las escuelas del Cartel, reclutaba con facilidad gracias a su conocimiento de las comunas. Esta capacidad le permitió organizar el asesinato de Lara Bonilla, ser el enviado de Escobar a desatar la guerra con el Cartel de Cali y luego instalar carrobombas en diferentes

2 Sobre el tema de la sicaresca en la literatura y el cine pueden consultarse varios textos: (Von der Walde, 2000. Reyes, 2007. Rengifo, 2008. Osorio, 2008. Jáuregui y Suárez, 2002).

3 Agradezco la lectura y comentarios de los politólogos Lorena Flórez Holguín y William Darío Chará. Este artículo se basa en la recolección de información de los diarios El Liberal (Popayán), El País (Cali), El Tiempo (Bogotá) y la revista Semana, a partir de los cuales se contruyó una base de datos de más de 5.000 registros. Agradezco el acopio realizado por William Darío Chará, Andrés Edilberto Vargas y Luís Fernando Calvache.

lugares del país, que mataron a 262 civiles. Además se le atribuyó el asesinato de 129 policías en Medellín. “Pinina” fue dado de baja en 1990, a sus 29 años.

Escobar pagaba en 1990 USD 3.500 por un policía uniformado, USD 8.800 por uno de civil y USD 880.000 por un general⁴. Los acusaba de ser “sicarios oficiales” que tenían grupos de limpieza. Algunos sectores de la Policía al parecer realizaron este tipo de acciones, ante la inoperancia de la justicia que dejaba libres a los sicarios. Encapuchados armados con *mini-ingram* iniciaron recorridos por las zonas donde vivían los sicarios. Acribillaban en especial a jóvenes, entre 16 y 30 años, algunos de ellos estudiantes, trabajadores y habitantes inocentes. Este era parte del tratamiento policial que se le daba al sicariato en el contexto de *guerra a muerte* entre el Gobierno y el narcotráfico, sin que mostrara resultados en la reducción de la violencia (Ortiz, 1991: 72).

Escobar confrontó al Estado con bombas, secuestros y el asesinato de personajes públicos; desde aquellos que lo perseguían, como ministros, jueces y policías, hasta candidatos presidenciales y familiares de políticos reconocidos. Estos actos eran la forma de presionar la negociación con el Estado, en la búsqueda de pasar de ser un delincuente común, durante la presidencia de Betancur (1982-1986), a su autorepresentación como un combatiente rebelde con Barco (1986-1990) (Orozco, 1991: 31-32). Este intento se logró parcialmente con Gaviria (1990-1994), a partir de la entrega de Escobar y sus lugartenientes en 1991, tras garantizarle el gobierno un trato jurídico especial, pero se desdibujó con su fuga, a pesar de intentos como el de enero

4 A lo largo del artículo presentamos valores en dólares, que corresponden a las siguientes cotizaciones del peso colombiano a diciembre, para cada uno de los años: 1988 (335,86), 1990 (568,73), 1992 (737,98), 1999 (1.873,77), 2001 (2.291,18), 2002 (2.864,79), 2005 (2.284,22), 2006 (2.238,79), 2009 (2.256,99).

de 1993, cuando anuncia la creación del grupo armado “Antioquia Rebelde”.

La organización de Pablo Escobar se debilitó tras su fuga de la cárcel en julio de 1992, debido al cerco de las autoridades y “Los Pepes”, perseguidos por Pablo Escobar, que detuvieron y eliminaron a sus hombres de confianza, de manera que recurrió a novatos y oficinas de cobro (Duncan, 2005: 18-19). Estos venían de las bandas barriales compuestas por 20 pandilleros, de los cuales dos o tres se contactaban con “las oficinas” y uno se convertía en un sicario de importancia. Los demás se dedicaban a trabajar por cuenta propia, improvisando y buscando mejores oportunidades, en muchos casos parados en las calles de Bello, en el sector de Guayaquil o en el Barrio Antioquia, como si fueran músicos o prostitutas a la espera de maridos celosos o comerciantes estafados.

En 1990 con el cerco a Pablo Escobar, el miedo de los intermediarios y la organización infiltrada por los organismos de seguridad, más de 3.000 sicarios se encontraban desempleados. Esto motivó una reunión en el municipio de La Estrella (Antioquia) entre John Jairo Velásquez “Popeye”, mano derecha de Escobar, y los jefes de algunas de las 300 bandas que operaban en Medellín y se dedicaban al secuestro, robo de carros, residencias, bancos y al atraco callejero. El mensaje de Escobar era que seguiría subvencionando a las bandas mientras pasaban las dificultades. No obstante, con la muerte de “Los Priscos” en 1991, y la ausencia de un control hegemónico, aumentaron las masacres entre bandas de trayectoria y grupos emergentes. Tras la muerte de Pablo Escobar en 1993, disminuyeron los homicidios en Medellín, pero se incrementó el hurto de vehículos y los robos a entidades financieras se cuadruplicaron. Además proliferaron los capos, traquetos y sicarios, ante la posibilidad de un rápido ascenso en las estructuras de las pequeñas y medianas organizaciones criminales.

Hegemonía y control

En la década de 1980 la Oficina de Envigado y La Terraza eran utilizadas por Escobar en labores de control, fiscalización y cobro de un porcentaje de sus ganancias a narcotraficantes, secuestradores, extorsionistas y asaltantes de bancos. La Oficina de Envigado estaba a cargo de los hermanos Moncada y Galeano, que en 1992 fueron asesinados por Escobar bajo la sospecha de robarle 20 millones de dólares. Diego Fernando Murillo, “Don Berna”, que venía de la guerrilla del EPL y era el jefe de seguridad de Fernando Galeano, formó parte de “Los Pepes”, para aniquilar al capo y sus hombres. Tras la muerte de Escobar y con el dominio de la oficina, “Don Berna” se convirtió en el nuevo hombre fuerte de Medellín, sirviendo de árbitro en el negocio del narcotráfico y recibiendo el 30% de todo asalto, robo o asesinato cometido en la ciudad, que sólo se realizaban bajo su consentimiento. En el 2000 se desplazó al Valle del Sinú y se convirtió en el comandante paramilitar “Adolfo Paz”, incluyendo a La Terraza y la Oficina de Envigado en el Bloque Cacique Nutibara, con el que se desmovilizó en 2003.

En la actualidad, la Oficina de Envigado es una organización que opera con más de 360 combos y funciona como un *holding* que protege rutas del narcotráfico, más de 3.000 expendios de drogas que producen USD 5.3 millones mensualmente, la extorsión a transportadores de 4.600 buses por USD 160 mil, las máquinas tragamonedas USD 2.6 millones, pagos de seguridad, desde comerciantes ambulantes hasta grandes almacenes e incluso el manejo de desechos tóxicos. Despues de la extradición de “Don Berna” en 2008, se generó una fuerte confrontación por el control de la oficina, en la que se involucran jefes paramilitares y narcotraficantes.

En el caso de La Terraza, también quedó bajo las órdenes de los Castaño y de “Don Berna” para enfrentarse a Escobar. Entre las acciones realizadas al servicio del paramilitarismo se destacan el secuestro de la

senadora Piedad Córdoba (1999), el asesinato de los investigadores del CINEP, Elsa Alvarado y Mario Calderón (1997), del periodista Jaime Garzón (1999), del profesor Hernán Henao (1999) y de los defensores de derechos humanos, Jesús María Ovalle (1998) y Eduardo Umaña Mendoza (1998). No obstante, la relación con los paramilitares se debilitó con el asesinato, en el 2000, de varios miembros de La Terraza a manos de Carlos Castaño, acusados de ser delincuentes comunes, cuando la lucha de los paramilitares era política y contra la subversión. En la actualidad, la banda opera con un grupo de hombres que hacen los contactos con los más de 250 combos de Medellín que cuentan, entre otros, con sicarios, apartamenteros y ladrones de carros.

En 1989 existían en Medellín 300 bandas que se redujeron a 20 en 1993, dedicándose a la delincuencia común y en algunos casos, a trabajar con el narcotráfico. Gran parte de las bandas desparecieron y otras se integraron a las milicias de las FARC y el ELN. La presencia de las milicias populares en Medellín se afianzó tras la rendición de los capos del Cartel de Medellín, en 1991, actuando con cerca de 8.000 hombres que buscaban exterminar a drogadictos, ladrones, expendedores de drogas y sicarios (Pérez, 2007: 347). A estos últimos, distribuidos en 60 bandas y con más de 3.000 hombres, les daban primero la oportunidad de retirarse de la zona o dedicarse a labores que no atentaran contra la seguridad y la tranquilidad. En 1997 operaba en Medellín, el Bloque Popular Miliciano con seis organizaciones cercanas a las FARC y tres al ELN, dedicadas a la extorsión y el asesinato de delincuentes, además de 80 bandas de sicarios, ladrones de carros, secuestradores, el Frente Armado Anticomunista y los narcotraficantes. Este era el escenario en que, tres años después, el frente José María Córdoba y los paramilitares, en un intento de urbanizar la guerra, pretendían el reclutamiento de 8.600 sicarios, los mismos que cada 3 horas mataban a una persona en Medellín y a los que les ofrecían

dinero, armas e incluso estufas de cocina.

A finales de la década de 1990 “Don Berna” aniquiló a las milicias del ELN y las FARC, expulsó a Carlos Castaño de la comandancia de las AUC, por su oposición a la relación entre narcotraficantes y paramilitares, además de controlar la cárcel de Bellavista, donde se cometían hasta 50 homicidios en una semana, y que llegó a pasar dos años sin un muerto (Montoya, 2002: 150-153). Las autoridades asignaban la disminución de la mortalidad en Medellín a la acción policial y a los programas sociales y de convivencia. Algunos sumaban el control territorial de “Don Berna”, en lo que se llegó a denominar la “donbernabilidad”.

Las Oficinas y el Cartel de Cali

El Cartel de Cali concentró sus esfuerzos en infiltrarse en el comercio, la política y los medios, conservado un bajo perfil. El Bloque de Búsqueda, que se formó en su persecución durante 1994, tenía menos armas y más computadores para rastrear propiedades y rutas de dinero. Su estructura tenía cuatro divisiones: narcotráfico, política, militar y financiera⁵. La militar incluía sicarios, inteligencia, guardaespalda y vigilancia, además de los policías y militares al servicio del Cartel, que se calculaba eran el 30% del pie de fuerza de Cali. Este carácter de *empresa* se afirmó con Juan Carlos Ramírez Abadía “Chupeta”, uno de los miembros de su última generación, que al ser capturado en 2007 tenía en su computador la contabilidad de rutas, embarques, caletas, sobornos, inversiones, gastos personales y pagos de sicarios, como la relación de USD 1.3 millones pagados por el homicidio de 82 personas, entre febrero de 2004 y marzo de 2006.

El Cartel del Norte del Valle se fortalece al tiempo que el de Cali se debilita, a mediados de la década de 1990, con la muerte o captura de la mayoría de sus miembros. El Norte llegó

a controlar más del 50% de la producción de cocaína del país, con un promedio de 300 toneladas al año. Con el nuevo siglo se enfrentaron dos de su miembros, Diego Montoya, “Don Diego” y Wilber Varela, “Jabón”, creando respectivamente a “Los Machos” y “Los Rastrojos”, que llegaron a superar los 1.000 hombres y que produjeron al menos 2.000 muertes, entre 2003 y 2008. Además, “Don Diego” contaba con “Los Yiyo”, que cumplían labores sicariales en Cali, y con tres grupos más distribuidos en el departamento del Valle, encargados de ejecuciones y de custodiar los cargamentos de cocaína y de insumos químicos. Al final de 2003 la Policía consideraba que 662 de los 2.111 asesinatos cometidos en Cali eran producto de este enfrentamiento. En este escenario, el diario *El País* le pidió al presidente Uribe que interviniere, y el mandatario ordenó a la Policía la reactivación del Bloque de Búsqueda y solicitó a la Fiscalía el apoyo con medidas judiciales que dieran resultados, derivando en el desmantelamiento de “Los Yiyo”. Sin embargo, en el Cañón del Garrapatas, un espacio que brinda la salida de cocaína al pacífico, por el occidente del Valle, los enfrentamientos entre “Los Rastrojos” y “Los Machos” dejaban al menos 600 muertos en 2004, aunque en este proceso los primeros se autonombraron Rondas Campesinas Populares (RCP) y los segundos Autodefensas Unidas Campesinas del Valle (AUV), para no presentarse como simples bandas de sicarios.

En Colombia los grandes Carteles tenían grupos organizados, pero dentro de las medianas y pequeñas organizaciones que surgieron después, se dio el uso de las oficinas de cobro. En 1996 en el Valle del Cauca se reconocía la existencia de oficinas de sicarios como empresas con organigramas, distribución de funciones y venta de servicios. Estas se camuflaban en salones de belleza, panaderías, compraventas, concesionarios de automóviles y almacenes de electrodomésticos. En 1999 se calculaban cerca de 50 en Cali, formadas por pistoleros que hicieron parte del Cartel

5 Sobre la estructura de las organizaciones de narcotraficante: Dombois, Rainer, 1998.

de Cali y jóvenes entre los 15 y 25 años. Utilizaban sicarios externos si el negocio era de poca monta. Los automóviles con los que realizaban los trabajos eran robados o sacados de concesionarios, donde eran devueltos tras el operativo. Sus precios oscilaban entre 1.000 y 160.000 dólares, pero se dedicaban a la extorsión a comerciantes e industriales cuando la demanda era baja.

En Cali, la oficina de “Tres Puntillas” es conocida de esta forma porque dejan como firma tres puntillas clavadas en el cráneo de las víctimas, aunque también descuartizan los cadáveres, los lanzan a los ríos o los desintegran en ácido cuando es necesario. La organización fue creada por los nuevos capos del Cartel de Cali en 1999 y heredada por “Jabón”. La banda opera en el Valle, eje cafetero y Bogotá, pero también realizan trabajos en México, Estados Unidos, España, Brasil, Venezuela, Ecuador y Panamá. La encabeza un ex-policía que tiene una red de informantes en organismos de seguridad, que les suministran información privilegiada y la garantía de que la fuerza pública esté lejos de la escena del crimen. Los sicarios tienen ingresos de hasta 2.200 dólares dependiendo de la víctima, además de salud, riesgos profesionales y viajes a centros vacacionales.

Paramilitares y sicarios

En 1985, con el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, se proclamaba la existencia de “fábricas de sicarios”. Algunos formados en las escuelas de Medellín, se perfeccionaron con un veterano de ETA (Euskadi Ta Askatasuna) en la fabricación de bombas, y con Yair Klein, un mercenario israelí que perteneció a los grupos especiales de asalto en su país. Tras retirarse del ejército creó *Hod Halanit*, una empresa de seguridad. Llegó en 1988 a trabajar para Gonzalo Rodríguez Gacha, “El Mexicano”, y los ganaderos de ACDEGAM, asediados por la guerrilla. Entrenó a sus hombres en manejo de explosivos, tácticas de asalto y técnicas de ase-

sinato, bajo el modelo inglés y alemán, e incluía la directriz de exterminar al enemigo de raíz, disparando ante cualquier sospecha.

En 1988 el jefe paramilitar, Fidel Castaño ofrecía: “por el trabajo que van a hacer, recibirán una paga de 150 mil pesos mensuales y una bonificación de 200 mil pesos por cada h.p. guerrillero y campesino torcido que maten”⁶ (Semana, et. al., 1993). De esta manera, el pago y la bonificación por el asesinato aproximan a los paramilitares al sicariato. Si bien parte de los individuos que engrosan estas organizaciones lo hacen fundamentalmente porque fueron víctimas de los subversivos o por defender la lucha contraguerrillera, otros ingresan como una forma de sobrevivir en términos económicos. La diferencia entre paramilitar y sicario es difusa, en la medida en que no se utiliza en Colombia la palabra *mercenario*, que puede tener un sentido más adecuado, al referirse a la incorporación a una organización armada de forma temporal o permanente, pero más prolongada que los servicios del sicario, que establece una relación contractual en un momento específico, por un homicidio particular. Carlos Castaño consideraba en 1996 que los sicarios no tenían principios, ni arraigada lucha alguna y se movían como una veleta, de allí que fuera tan peligrosa la infiltración del narcotráfico en las autodefensas.

Entre 2003 y 2006 se desmovilizaron la mayoría de las autodefensas. Esto le permitió a la banda de sicarios de “Los Triana” su incorporación a los Bloques Mineros y Héroes de Granada de las AUC, comandadas por “Don Berna”. Los hermanos Castaño vendieron el Bloque Arauca a los “Mellizos” Mejía Múnera, señalados narcotraficantes y “Don Diego” trató de comprar un bloque para incluir a “Los Machos”. Entre los narcos y sicarios que lograron pasar como paramilitares está el Bloque Central Bolívar, liderado por Carlos Mario Jiménez, “Macaco”, con

más de 5.000 hombres, considerados tiempo después, por su mismo líder, como sicarios que nunca combatieron contra la guerrilla. De los grupos que se desmovilizaron, algunos se reagruparon para trasformarse en unidades sicariales que hoy buscan controlar poblaciones y entidades públicas.

En 1991 las autoridades negaban la existencia de organizaciones de sicarios en Bogotá, pero tres años más tarde reconocían su presencia. En 2001 ya era evidente la existencia de bandas como la de “Los Boyacos”, que operaban a tres calles del Palacio de Nariño, en la calle del Cartucho. En 2005, y tras la desmovilización del Bloque Capital de las Autodefensas, se produjo un enfrentamiento entre los grupos de sicarios de “Jorge Pirata” y “Martín Llanos” y la ocupación de los espacios dejados por el Bloque. De igual forma, habían gatilleros en Cazucá, al sur de la ciudad, que siguieron sus labores luego de trabajar para el Bloque Capital, asesinando a personas acusadas de ser colaboradoras de las FARC y milicianos. De los 156 homicidios ocurridos en Soacha en 2007, la Policía los acusaba del 85%. En 2009 operaba la oficina de Suba, un reducto del Bloque Capital, bajo el control del “Loco” Barrera, con 2000 hombres entre sicarios y pandilleros, que dividió la ciudad en dos, a partir de la calle 72 y con satélites en Soacha y Bosa.

Móviles y tarifas

Los usuarios del sicariato tienen motivos muy diversos. *Políticos*: el exterminio sistemático de los miembros de la UP en la década de 1980, el asesinato en medio de competencias entre los partidos políticos y al interior de estos, las denuncias por corrupción. *Limpiezas*: pagadas por comerciantes, paramilitares y narcos. *Económicos*: narcotráfico, asesinato de prestamistas de dinero, disputas por empresas, herencias, propiedades, juegos de azar y deudas. *Pasionales*: celos e infidelidades. Además de pugnas personales, que junto a las pasionales suelen asociarse a un tipo de violencia impulsiva que

al parecer sólo se resolvería en riñas y homicidios perpetrados por los ofendidos.

La tarifa de los sicarios varía: los USD 22 en que se conseguía un sicario en la ciudadela Atalaya, un sector marginal de Cúcuta, para cobrar líos pasionales, una humillación pública o el pago de una deuda (2001). Por el asesinato de la liquidadora de la Corporación Financiera de Occidente (Corfioccidente) en Pereira, los sicarios recibieron USD 1.000 y la oficina USD 35.000 (2002). En Aguachica (Cesar), un desmovilizado del Bloque Central Bolívar le cobró a Julio César Villalobos USD 134 por matar a su esposa, los cuales entregó por cuotas semanales (2006). Las formas de pago cambian dependiendo del riesgo, la logística y los costos de intermediación, asociados al carácter de la víctima y al nivel de organización del sicario, que puede ir de individuos aislados a bandas organizadas. En medio de una relación donde el agente material y el intelectual no requieren estar unidos, el sicariato es una actividad donde se entrecruzan la violencia política con la no política (Ortiz, 1991: 61). Desde asuntos familiares y económicos particulares hasta los magnicidios del narcotráfico, los ajustes de cuentas y la violencia política son objeto del sicariato, aunque los límites entre estos temas pueden ser muy difusos (Pécaut, 1991: 49).

Trayectorias

Las historias de vida de los sicarios son diversas, aunque suelen trascender en los medios sólo aquellos que se vuelven reconocidos por sus acciones. En 1993 un sicario que se presentaba como testigo en varios procesos, narraba que se inició en el paramilitarismo con Fidel Castaño, siendo entrenado en un principio por militares, a mediados de la década de 1980, y por Yair Klein. Después pasó al servicio de “El Mexicano”, participando en los homicidios de Carlos Mauro Hoyos y Luis Carlos Galán. Cuando se entregó Pablo Escobar disminuyó el dinero y los contratos, así que se incorporó al Cartel de la Costa, que

necesitaba ayuda en el cobro de cuentas. Entre los homicidios que cometió estaba el del cantante de vallenato Rafael Orozco y el de los hermanos Durán, miembros del Cartel. El sicario desertó porque la organización decidió matarlo, asesinaron a su esposa embarazada y a su hijo de tres años.

José Ever Rueda se inició en el frente 22 de las FARC, luego pasó a las autodefensas, al mando de Henry Pérez y “El Mexicano”, participando en el homicidio de Luis Carlos Galán, Teófilo Forero y José Antequera, además de la bomba al diario *El Espectador*, como lo relató en una carta que dejó a su madre, en mayo de 1992, un mes antes de que lo asesinaran en el pabellón de máxima seguridad de La Modelo. Eliécer Ordóñez Vivas, “Pirri”, nació en 1975 en los llanos orientales de Colombia, comenzó con las Autodefensas Campesinas de Casanare y después se dedicó a cometer asesinatos selectivos en Villavicencio, desde limpiezas de delincuentes hasta crímenes pasionales, por precios que oscilaban entre los 45 y los 135 dólares en 2006.

Algunos ascienden de sicarios a narcotraficantes. Entre los sicarios de Escobar se encontraban hombres que probaron su lealtad, como John Jairo Velásquez, “Popeye”, que le entregó su novia al capo, bajo la sospecha de ser informante de la Policía. Era experto en explosivos, secuestros y asesinatos selectivos, con más de 700 víctimas y el pago por más de 500 policías muertos. Aunque se encuentra en la cárcel desde 1992, se afirma que tiene rutas del narcotráfico y maneja pabellones en varias cárceles del país. En 2007, de las 600 personas que ocupaban la primera línea de sicarios del Cartel de Medellín, sobrevivían cinco.

El paramilitar Rodrigo Pelufo, “Cadena”, se inició como sicario con la banda “La Cascona”, pasando luego a las autodefensas. En 2004, después de múltiples asesinatos y masacres, se consolidó como el hombre fuerte en el golfo de Morrosquillo, área de salida de cocaína e ingreso de armas. Carlos

José Robayo, “Guacamayo”, empezó como sicario de Elmer “Pacho” Herrera a mediados de la década de 1990, escalando posiciones gracias a su frialdad y eficiencia. Llegó a dirigir una oficina de cobro en Jamundí conocida como “Los Pachos”, pasando al servicio de “Don Diego”, convirtiéndose en su hombre clave para el manejo de rutas de droga y fortaleciéndose aún más con la guerra entre “Don Diego” y Varela, creando “Los Machos”, hasta que fue capturado en marzo de 2005.

“Pescador” mató en 2006 a un narcotraficante en medio de una decena de sus guardespaldas, tras 90 días detenido, un grupo de ocho jóvenes lo sacaron del reformatorio después de reducir a los guardias. Se dice que la banda de “La Cordillera” pagó USD 13.500 para liberarlo, conservar sus servicios, su carácter de inimputable y los secretos que nunca confesó. “Pescador” tenía 13 años, menos de 30 kilos de peso y sin alcanzar los 1,50 de altura, era uno de los asesinos más temidos de Pereira. En 2003, Yenith Licet de 20 años y Luisa María de 24, asesinaron a dos hombres en Bogotá. Eran dos sicarias profesionales que integraban una banda de mujeres en Pereira, comandada por la hija de un narcotraficante. Además, Luisa María estaba sentenciada a 36 años por secuestro extorsivo agravado, tráfico de armas y hurto calificado y agravado, adicional a un proceso por fuga de presos e intento de homicidio.

La demanda de sicarios se surte constantemente de las bandas barriales, de la misma forma que lo hace de personas de niveles socioeconómicos bajos y medios, entre ellas, menores de los que se aprovecha su carácter de inimputables y de mujeres que han incrementado su presencia en las organizaciones sicariales, aunque ya lo hacían desde la época de Pablo Escobar. Asimismo, los sicarios no son sólo jóvenes dispuestos a jugarse la vida, sino que también se incorporan mayores de 25 años, en especial los que vienen del paramilitarismo y los desempleados del narcotráfico.

Los orígenes y las causas

Las explicaciones del origen de los sicarios se enfocan en la falta de adaptación a normas, pérdida de valores familiares, drogas, alcohol y delincuencia, que promueven la agresividad y aniquilan el miedo. Este era el diagnóstico de psiquiatras, terapeutas y jerarcas de la Iglesia católica en Medellín. Su arzobispo, Alfonso López Trujillo, afirmaba en 1990, que el sicariato no se originaba en la pobreza y el desempleo, sus causas primordiales las encontraba en la pérdida de los valores familiares, en la falta de la figura paterna. No obstante, los sacerdotes bendecían las motos de los sicarios en la década de 1980, en una relación permisiva, aceptando las generosas donaciones de los narcotraficantes y acompañándolos a los barrios de los sicarios.

A pesar del sentimiento religioso que expresa una gran parte de los sicarios, también se cometen homicidios al interior de las iglesias, y lo que antes era un mal agüero, terminó por convertirse en una práctica común en Colombia; el asesinato de sacerdotes. Entre 1980 y 1987 fueron asesinados 18 sacerdotes, a los que se sumarían 45 sacerdotes y 54 pastores entre 1992 y 2002, víctimas de guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, políticos corruptos y delincuentes comunes. Entre ellos se encontraban tres obispos y el arzobispo de Cali, Isaías Duarte Cancino, el mismo que en la Semana Santa de 1999 pedía que se desterrara de Cali y del Valle del Cauca el negocio del narcotráfico, que traía a la guerrilla y los paramilitares para custodiar sus laboratorios, de donde salía el dinero para financiar a los sicarios.

La culpa se atempera en el sicario que se confiesa, y considera que es malo matar personas buenas, pero no cuando son malas; de la misma forma que se siente culpable por matar a 10 personas y no por el simple hecho de matar. La culpa se difiere, quien paga por asesinar es el responsable, no el

que ejecuta el homicidio. Un juicio que tienen incluso las mismas víctimas, como el líder sindical Wilson Borja, que en el año 2000 salió gravemente herido de un ataque ordenado por Carlos Castaño, y quien sostenía que perdonaba a los sicarios, pero que nunca se reuniría con los jefes paramilitares en un diálogo de paz. Una reacción similar a la de una mujer que declaraba: "Mi papá, Jorge Darío Hoyos Franco, cayó víctima de dos sicarios el 31 de marzo de 2001... Los responsables fueron condenados, y los perdonó porque eran jóvenes sin dinero" (Semana, et. al., 2009).

El sicariato se inscribe en la noción de que Colombia es un país asesino e indolente, donde existe una "cultura de la muerte", al menos desde el período de la Violencia, que se agudiza con el surgimiento del sicariato. Es una idea que se afirma desde la reiteración de las estadísticas y detalles escabrosos, ligando la violencia familiar con la guerrillera, paramilitar o delincuencial, como si fuera una sola unidad, a la que se añaden explicaciones que muestran la historia colombiana en una suma interminable de violencias y parte de la identidad nacional (Jimeno, 1998: 44). La violencia surge como un ente, la misma de siempre: "De esta manera lo que está ocurriendo ahora sería lo mismo de hace 40 años, lo mismo de los años treinta, lo mismo de la guerra de los mil días, lo mismo del siglo XIX. Este es el gran mito colombiano" (Pécaut, 1994: 12). Sin embargo, no podemos ignorar que vivimos en medio de una sociedad en la que el homicidio es una experiencia cotidiana que suele asumirse como un posible costo de la vinculación con actividades ilegales, en la lucha político-militar e incluso por la inseguridad que puede afectar a cualquier ciudadano. Pero en el reconocimiento de la muerte como consecuencia de algunos tipos de relaciones entre actores sociales, se deben distinguir los vínculos que pueden desencadenar acciones violentas, sin diluirlas en la noción de una "cultura de la violencia".

Rehabilitación, justicia y mecanismo de control

En algunos casos, las acciones frente al sicariato se plantean desde la rehabilitación, con aportes de cooperación internacional, ONG, iglesias y líderes locales. Entre las iniciativas estatales, una de las más conocidas fue la Consejería de Paz de Medellín, presentada por el presidente Gaviria (1990-1994) el día de su posesión, y que fue recibida en Medellín como una expresión de solidaridad del Gobierno central con la ciudad, para comprometer recursos destinados a la rehabilitación de las comunas agobiadas por graves problemas socioeconómicos que generaban violencia. Tres años después, su directora María Emma Mejía dejaba el cargo, afirmando que se había dado el primer paso para rehabilitar a un sector de la población que vivía en la “cultura de la violencia”. Consideraba “reinsertados” a 1.700 jóvenes, con proyectos de educación, empleo, salud y desarrollo urbano, que podían ser una solución a la miseria y violencia de Medellín. Aunque las acciones de la administración metropolitana de Medellín no se limitaron a medidas represivas y aumento del pie de fuerza, se veían con escepticismo ante las necesidades que sobrepasaban los recursos disponibles. Sin embargo, el que se diera esta inversión no extinguiría el sicariato, al persistir la separación entre el norte y el sur de la ciudad, las propuestas integradoras paternistas, la movilidad social ilegal, la demanda de sicarios por todos los estratos sociales y la negligencia de la justicia, que requería de propuestas a corto, mediano y largo plazo (Ortiz, 1991: 73).

El ex-procurador Jaime Bernal Cuellar afirmaba en 2004, que no había una verdadera política criminal, por la discrecionalidad del legislador para determinar las condenas, sin tener en cuenta la gravedad de los hechos y su impacto social. Un ejemplo es el asesino del periodista Orlando Sierra, que salió de prisión tras reducir el 80% de su condena de 29 años; por confesión le reba-

jaron a 19 años y cinco meses (234 meses). Por sentencia anticipada, la tercera parte de la condena; nueve años y nueve meses (117 meses). Por el principio de favorabilidad, un juez revocó la sentencia anterior, y aumentó el descuento inicial a la mitad de la pena por sentencia anticipada, de acuerdo con el nuevo Sistema Penal Acusatorio. La condena quedó en 14 años y siete meses (175 meses). Por Justicia y Paz, un juez de Tunja le otorgó 17 meses y 15 días de redención. Por estudio y trabajo le descontaron 21 meses. Finalmente la condena se redujo a 106 meses, el sicario pasó 67 meses y 24 días de cárcel, desde el 30 de enero de 2002 hasta el 30 de septiembre de 2007. Meses más tarde fue dado de baja por la Policía tras disparar contra un comerciante en la ciudad de Cali. Este sistema de rebaja de penas en Colombia se deriva, en buena parte, de las reformas al Código Penal realizadas en medio de las negociaciones con el narcotráfico, durante el gobierno Gaviria.

En 1987 se dictan disposiciones para el control de motocicletas como una forma de disminuir el sicariato. Una de estas medidas era la obligación de dar aviso a la Policía de las unidades vendidas y los datos del comprador, además de la prohibición de vender motocicletas de más de 125 centímetros cúbicos. Para algunos, estas medidas eran absurdas, porque un sicario no iba a comprar una moto horas antes del asesinato, y el problema no era el cilindraje sino la habilidad del conductor. El presidente de Asopartes (Asociación del sector automotor y sus partes), 22 años después, reiteraba que en Colombia todo parrillero era considerado como un posible sicario y que las restricciones afectaban el mercado de las motos, en un país donde circulan 2.600.000 y el 70% son utilizadas para laborar.

El control de armas es otro mecanismo recurrente para tratar de disminuir la violencia en general y el sicariato en particular. En el caso de Medellín, las armas que se utilizaban en la década de 1990 venían en un 80% de Estados Unidos, renovándose rápidamente, para depreciarse y pasar de la guerrilla

a las milicias, luego a pandilleros y sicarios, hasta terminar entre delincuentes secundarios. En la actualidad existen lugares para alquiler de motos, carros y armas. Las armas se consiguen desde USD 90 por un revólver, USD 220 por una pistola, USD 440 con silenciador, hasta rifles con mira telescopica láser. Después de usarlas les cambian las características que las puedan asociar con los proyectiles disparados, como los cañones o los percutores. El tipo de armas que se usa es cada vez más sofisticado, en especial cuando se trata de organizaciones bien estructuradas, aunque también se dan casos de sicarios que, a falta de medios, asesinan con cuchillos y se desplazan en bicicletas.

El Estatuto Antiterrorista expedido en medio de la confrontación con Pablo Escobar en 1988, fortalecía las funciones de Policía Judicial de los organismos del Estado, incrementaba las penas a los delitos cometidos con fines terroristas, castigaba las formas de justicia privada, promovía la colaboración ciudadana para la captura de delincuentes y creaba el Comité Antisicarial. En 2001 seguía operando y estaba integrado, entre otros, por el ministro de Justicia, el ministro Defensa, el Fiscal y el Procurador, con la función de promover en los consejos de seguridad medidas efectivas para el control de armas, vehículos y comunicaciones, en procura de capturar a los organizadores, dirigentes y promotores de autodefensa, bandas de sicarios y escuadrones de la muerte, a sus financiadores y a quienes le suministraban las armas.

De igual manera se han formado conjuntos especializados, desde el Cuerpo Élite de la Policía (1988), el Bloque de Búsqueda (1989) y el de búsqueda de los grupos de justicia privada (1997), hasta la Fuerza de Control Urbano (FUCUR) que desarrollan acciones de inteligencia, infiltraciones y operaciones de comando, evitando la entrada masiva de efectivos (2007) y las brigadas contra homicidios conformadas por la Fiscalía, Policía, Ejército y DAS, que surgen cuando se incrementan las tasas de homicidio en las diferentes

ciudades del país. Estos últimos hacen parte de los intentos de fortalecer la iniciativa en seguridad de las autoridades departamentales y municipales, en el contexto de la política de Seguridad Democrática del presidente Álvaro Uribe (2002-2010), que promueve desde 2004 la gobernabilidad local en materia de convivencia y seguridad ciudadana (Gómez y Baracaldo, 2007: 104-106).

Mortalidad violenta, delincuencias y políticas de seguridad

En el período 1958-2007 murieron en Colombia 725.140 personas, sin contar los cuerpos que no se recuperaron, en especial entre 1998 y 2003, cuando muchas de las víctimas de los grupos armados fueron descuartizadas, enterradas en fosas comunes o arrojadas a los ríos. Las tasas más bajas se encuentran entre 1969 y 1975, que eran inferiores a 25, y las más altas en 1991 (78.0), 1992 (76.4) y 1993 (74.8), entre 2007 (39.2) y 2008 (33.0) se ubican las más bajas de los últimos 30 años (Melo, 2008)⁷.

El análisis de la fluctuación en la mortalidad violenta nos permite asociar una parte significativa a la presencia de grupos armados, narcotraficantes y delincuencia organizada, en la medida en que aumenta hasta en un 500% con la presencia de este tipo de actores, y disminuye en la misma proporción cuando se consolida un poder hegemónico ilegal, se desplazan o son reducidos por el Estado. En este escenario el sicariato es un recurso fundamental, en medio de acciones organizadas e instrumentales con fines específicos de intimidación, aniquilamiento y control.

Las acciones para enfrentar el sicariato suelen asociarse directamente a la confrontación con el narcotráfico y la lucha general contra la delincuencia cuando se incrementan las muertes violentas, excepto cuando se identifican oficinas de cobro organizadas y recono-

7 A la información de Melo sumamos los datos de 2008 suministrados por la Policía Nacional.

cidas. Así, en esta confrontación prima la idea de que la seguridad del Estado es la seguridad que la ciudadanía requiere para defenderse de las “clases peligrosas”, que incluye a la delincuencia, la subversión y los grupos de justicia privada (Camacho, 1994: 70). En el mandato de Álvaro Uribe esta asociación se profundizó, con énfasis en la guerrilla y el control de las bandas organizadas por las nuevas generaciones de narcotraficantes, además de los grupos de sicarios más reconocidos. Entre estas, la Oficina de Envigado, a la que se refería en sendas intervenciones en septiembre y noviembre de 2008:

A uno le dicen que todavía queda en la Oficina de Envigado ‘El Yyo’, que queda ‘El Memín’, que quedan unos bandidos de esos. Acábelos por cuenta mía, no se preocupe mi general (...) Yo vengo a decirles que no tendría sentido que hubiéramos pasado ocho años en la Presidencia y que esto no estuviera resuelto aquí. Uno necesita toda la autoridad. Mi general, si hay que mantener el Ejército a toda hora en las calles de Medellín, manténgalo. Yo le pido, dijó refiriéndose al general Dagoberto García, Comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, que todos los días se avance para acabar esos bandidos (Semana, et. al., 2008).

Al igual que en otras regiones de Latinoamérica, en nombre de la seguridad, el delito se enfrenta con mayores penas y más Policía, que reduce la inversión social en beneficio de la represión y el control, donde los carteles de la droga, las pandillas y los habitantes de los barrios pobres surgen como enemigos internos (Carrión, 2007: 6, 9). No obstante, en el caso colombiano, las penas no son un mecanismo eficiente para disuadir a los sicarios, ante los beneficios que la Ley otorga, y por el mismo hecho que es una actividad que viene acompañada de la posibilidad de su propia muerte violenta, que a muchos se les cumple.

Los mecanismos policiales tienden a mezclarse en el umbral difuso de la política de Seguridad Democrática, que logró disminuir las acciones de la guerrilla en las zonas rurales

y que incluso se esgrime como el modelo para atacar organizaciones complejas, como la Oficina de Envigado. No obstante, esta política de seguridad, basada en el aumento del gasto militar y el despliegue de tropas, tiende a ser ineficaz e ineficiente en contextos urbanos, ante grupos fragmentados y frente a la violencia impulsiva, que suelen atacarse con medidas como el control de vehículos, armas y alcohol. Cuando se producen reducciones en la mortalidad violenta suelen asociarse a estas medidas y al aumento del pie de fuerza policial y militar, sin que se discrimine el impacto de cada medida en los diferentes escenarios de conflicto que afectan, fusionando la violencia impulsiva y la delincuencia organizada en el discurso de la inseguridad.

Apuntes finales

Hemos tratado de mostrar las condiciones en las que surge y se desarrolla el sicariato en Colombia, los conflictos en que se demandan sus servicios, los grupos e individuos que lo utilizan y la dinámica en que se da la relación. El período es de tres décadas para adquirir una dimensión histórica mínima que permita identificar algunos cambios estructurales, con el propósito de mostrar su complejidad.

El sicariato organizado, desde las bandas hasta las oficinas, puede ser parcialmente controlado a través de los recursos de los contratantes o de la diversificación de sus actividades, como la extorsión y el narcotráfico. Sin embargo, los asesinos del narcotráfico desempleados, la fragmentación de las bandas, grupos y oficinas, además de la desmovilización de paramilitares y guerrilleros, dejan sicarios cualificados que pueden terminar en nuevas organizaciones o en la venta de servicios individuales.

Los programas de rehabilitación se reanudan al asociar la violencia a los procesos de urbanización, industrialización y redistribución de la riqueza, de manera que buscan la inclusión de los sectores marginados, en especial en momentos críticos de violencia y

criminalidad, sin que en general se constituya en una política permanente. Sin embargo, el origen de los sicarios como individuos se liga a su entorno privado, excluyendo en buena parte las discusiones sobre lo público y en especial de lo público estatal. Esto frente a un Estado que no propicia la institucionalización de los conflictos en el ámbito legal, que derivan en la privatización de la justicia a través del sicariato. El mismo Estado que genera políticas de seguridad basadas en el aumento de pie de fuerza, el control de armas y vehículos, sin que logren controlar efectivamente el narcotráfico y las mafias dedicadas a la extorsión, el secuestro y la venta de seguridad, que demandan del sicariato para actuar y regularse, al tiempo que velan el uso de los sicarios para resolver conflictos derivados de actividades legales y personales.

Los actores que en medio de un conflicto acuden a la violencia lo hacen entorno a un conjunto de intereses colectivos o individuales, que en el caso del sicariato deriva en la presencia de terceros para ejecutar una acción. El sicariato tiene la particularidad de ser un recurso que media en el desarrollo de conflictos de diversa índole, desde políticos hasta pasionales, que involucran desde al ámbito público estatal hasta el íntimo privado. Así, los móviles de los contratantes son diversos pero se unifican por la mediación del pago y la separación que existe entre el autor intelectual, el material y la víctima. En el momento en el que priman intereses distintos a la mediación del pago, el sicario pierde su carácter. □

Bibliografía

- Camacho Guizado, Álvaro (1994). “Seguridad: ¿para la gente o para el Estado?”, en *Analisis Político*, No. 21, IEPRI, Universidad Nacional, Bogotá, pp. 70-81.
- Carrión, Fernando (2007). “Reforma policial: ¿Realidad ineludible de una nueva doctrina de seguridad?”, en *URVIO*, No. 2, Flacso, Quito, pp. 5-22.
- Castillo, Fabio (1987). *Los jinetes de la*

- cocaína*. Editorial Documentos Periodísticos, Bogotá.
- Dombois, Rainer (1998). “Dilemas organizacionales de las economías ilegales. Aproximaciones sociológicas a propósito de la industria de la cocaína”, en *Analisis Político*, No. 33, IEPRI, Universidad Nacional, Bogotá, pp. 14-30.
- Duncan, Gustavo (2005). “Del campo a la ciudad en Colombia. La infiltración urbana de los señores de la guerra”, en *Documento CEDE*, Enero 2, Universidad de Los Andes, Bogotá, pp. 1-74.
- Gómez Rojas, Claudia Patricia y Estela Baracaldo Méndez (2007). “La corresponsabilidad: una estrategia para la convivencia y la seguridad ciudadana en la Policía Nacional de Colombia”, en *URVIO*, No. 2, Flacso, Quito, pp. 99-111.
- Jáuregui, Carlos y Juana Suárez (2002). “Profilaxis, traducción y ética: la humanidad “desechable” en Rodrigo D. No futuro, La vendedora de rosas y La virgen de los sicarios”, en *Revista Iberoamericana*, Vol. LXVIII, Núm. 199, University of Pittsburgh, Pittsburgh, pp. 367-392.
- Jimeno, Myriam (1998). “Identidad y experiencias cotidianas de violencia”, en *Analisis Político*, No. 33, IEPRI, Universidad Nacional, Bogotá, pp. 32- 46.
- Melo, Jorge Orlando (2008). “Cincuenta años de homicidios: tendencias y perspectivas”, en: *Razón Pública*, <http://www.razonpublica.org.co/?p=124>. (Visitada el 9 de mayo de 2009).
- Montoya Prada, Alexander (2002). “La casa de los espejos. Un recorrido por la cárcel de Bellavista en Medellín”, en *La Prisión de San Isidro. Incidencia física, psicológica y social de la reclusión*, Franklyn Fajardo Sandoval, Zamantha Correa Correa y Alexander Montoya Prada, pp.125-158. Editorial Universidad del Cauca, Popayán.
- Orozco Abad, Iván (1990). “Los diálogos

- con el narcotráfico: historia de la transformación fallida de un delincuente común en un delincuente político”, en *Análisis Político*, No. 11, IEPRI, Universidad Nacional, Bogotá, pp. 28-58.
- Ortiz Sarmiento, Carlos Miguel (1991). “El sicariato en Medellín: entre la violencia política y el crimen organizado”, en *Análisis Político*, No. 14, IEPRI, Universidad Nacional, Bogotá, pp. 60-73.
- Osorio, Oscar (2008). “El sicario en la novela colombiana”, en *Polígramas*, No. 29, Universidad del Valle, Cali, pp. 61-81.
- Pécaut, Daniel (1991). “Colombia: violencia y democracia”, en *Análisis Político*, No. 13, IEPRI, Universidad Nacional, Bogotá, pp. 35-49.
- Pécaut, Daniel (1994). “Es posible aún una interpretación global de los fenómenos recientes de violencia en Colombia”, en *Boletín Socioeconómico*, No. 27, Universidad del Valle, Cali, pp. 1-14.
- Pérez Marín, Mónica (2007). “Cartografías de lo público. Una aproximación desde los estudios culturales: Esferas públicas juveniles en la Comuna 13 de Medellín (Colombia)”, en *Investigación y Desarrollo*, Vol. 15 No. 002, Universidad del Norte, Barranquilla, pp. 344-365.
- Rengifo Correa, Ángela Adriana (2008). “El sicariato en la literatura colombiana: Aproximación desde algunas novelas”, en *Cuadernos de Postgrado*, No. 2, Escuela de Estudios Literarios, Universidad del Valle, Cali, pp. 97-118.
- Reyes Albarracín, Fredy Leonardo (2007). “Panorama de las novelas del sicariato 1980 – 2005”, en *Hojas Universitarias*, No. 59, Universidad Central, Bogotá, pp. 189-194.
- Von der Walde, Erna (2000). “La sicaresca colombiana Narrar la violencia en América Latina”, en *Nueva Sociedad*, No. 170, Fundación Friedrich Ebert, Bogotá, pp. 222-227.
- “Testimonio clave” (1993). *Semana*, (Octubre 25), <http://www.semana.com/noticias-nacion/testimonio-clave/54391.aspx>. (Visitada el 14 de septiembre de 2009).
- “Una vez más, el Presidente exige la captura de Cuchillo y El Loco Barrera” (2008a). *Semana*, (Noviembre 1), <http://www.semana.com/noticias-politica/vez-presidente-exige-captura-cuchilllo-loco-barrera/117346.aspx>. (Visitada el 14 de septiembre de 2009).
- “Cayó ‘Memín’, uno de los narcotraficantes más buscados de Antioquia” (2008b). *Semana*, (Septiembre 20), <http://www.semana.com/noticias-on-line/cayo-memin-narcotraficantes-buscados-antioquia/115613.aspx>. (Visitada el 14 de septiembre de 2009).
- “Violencia contra sindicalismo puso a debatir a la Cámara de E.U” (2009). *Semana*, (Febrero 13), <http://www.semana.com/noticias-relaciones-exterieores/violencia-contra-sindicalismo-puso-debatir-camara-eu/120685.aspx>. (Visitada el 12 de septiembre de 2009).